



Referencias a Paraguay

Prefacio

El informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupeficientes (JIFE) correspondiente a 2013 marca un hito especial: el 45º informe anual de la Junta desde su constitución en 1968 de conformidad con la Convención Única de 1961 sobre Estupeficientes. Desde entonces han surgido enormes dificultades y se han desplegado considerables esfuerzos para hacer frente al problema mundial de las drogas. Cabe destacar el hecho de que prácticamente todos los Estados se han adherido a la Convención de 1961, lo que ilustra el compromiso de los gobiernos con el principio de la responsabilidad compartida de asegurar la disponibilidad de estupeficientes para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación y uso indebido. Para afrontar las dificultades que surgieron posteriormente en la labor de fiscalización de drogas, como la necesidad de asegurar la disponibilidad de sustancias sicotrópicas para fines médicos y evitar al mismo tiempo su uso indebido, el uso de sustancias químicas para la fabricación ilícita de estupeficientes y sustancias sicotrópicas y el tráfico de drogas, los Estados crearon y aprobaron los otros dos tratados de fiscalización internacional de drogas en vigor hoy día: el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupeficientes y Sustancias Sicotrópicas. Esos tratados también han logrado una adhesión casi universal.

En el período que comenzó con el establecimiento de la Junta, la comunidad internacional ha afirmado y reforzado su compromiso con la responsabilidad compartida en la fiscalización de drogas, por ejemplo, en el vigésimo período extraordinario de sesiones de la Asamblea General y mediante la aprobación en 2009, por la Comisión de Estupeficientes y la Asamblea General, de la Declaración Política y Plan de Acción sobre Cooperación Internacional en Favor de una Estrategia Integral y Equilibrada para Contrarrestar el Problema Mundial de las Drogas. En la actualidad, la comunidad internacional está a punto de iniciar, en marzo de 2014, el examen de alto nivel de la Declaración Política y el Plan de Acción, en el que participará la JIFE conforme a su labor de supervisión y promoción de la aplicación de los tres tratados de fiscalización internacional de drogas. Se han puesto en marcha asimismo los preparativos del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General sobre el problema mundial de las drogas que se celebrará en 2016, en que se dedicará atención renovada y de alto nivel a esa cuestión y se marcará el camino que se habrá de seguir.

Los informes anuales de la JIFE, acompañados de los informes anuales sobre precursores y las publicaciones técnicas sobre estupeficientes y sustancias sicotrópicas, sirven para hacer balance de los avances logrados, las dificultades encontradas y los esfuerzos adicionales que ha sido preciso realizar. El presente informe anual correspondiente a 2013 concluye con un capítulo que contiene recomendaciones dirigidas a los gobiernos y las organizaciones internacionales y regionales a fin de mejorar la aplicación de los tratados y, a la larga, asegurar la disponibilidad de sustancias fiscalizadas para fines médicos y científicos, evitando al mismo tiempo su desviación por canales ilícitos y su fabricación ilícita, tráfico y uso indebido.

Ante la inminencia del examen de alto nivel y los preparativos del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General, la JIFE ha decidido incluir en el presente informe un capítulo temático sobre las consecuencias económicas del uso indebido de drogas. La reflexión sobre el

uso indebido de drogas desde esa perspectiva es un modo útil de analizar sus efectos. Lejos de ser una variable independiente, el uso indebido de drogas suele formar parte de un círculo vicioso, como señaló la Junta en el capítulo temático sobre cohesión social de su informe anual correspondiente a 2011. No obstante, al planificar, plantear y aplicar medidas para prevenir y tratar el uso indebido de drogas resulta útil examinar sus efectos y entender sus consecuencias económicas.

Así pues, en el capítulo I se examinan las consecuencias económicas del uso indebido de drogas en los ámbitos de la salud, la seguridad pública, la delincuencia, la productividad y la gobernanza y se explica cómo las inversiones en prevención, tratamiento y rehabilitación pueden reportar considerables beneficios desde el punto de vista de los gastos en salud y relacionados con la delincuencia que se evitan, sin olvidar el alivio del enorme sufrimiento de los drogodependientes y de sus familiares y seres queridos. No obstante, de los datos disponibles se deduce que tan solo uno de cada seis consumidores problemáticos en todo el mundo recibe el tratamiento que necesita, cifras que varían considerablemente de unas regiones a otras. Además de los fallecimientos relacionados con las drogas y el aumento de la morbilidad causados, entre otras cosas, por la transmisión de enfermedades infecciosas mediante el consumo de drogas por inyección, las personas que están bajo los efectos de las drogas pueden representar riesgos para la salud, por ejemplo, al provocar accidentes.

A menudo, las personas que están bajo los efectos de las drogas cometen delitos para costear su adicción, y el delito forma parte de la violencia entre los grupos delictivos organizados que se dedican al tráfico de drogas; esto es especialmente patente en Centroamérica, pero ningún continente está libre de esa lacra. Entre las consecuencias económicas de la delincuencia relacionada con las drogas figuran no solo las que se derivan directamente del delito en sí, sino también los costos asociados a las actividades de aplicación de la ley, el sistema judicial y el encarcelamiento. La corrupción relacionada con las drogas puede debilitar la gobernanza, lo que a su vez propicia el aumento de los cultivos ilícitos para la producción de drogas y la producción, fabricación y tráfico ilícitos de drogas; esto se transforma en un círculo vicioso, como se analiza en detalle en el informe anual de la JIFE correspondiente a 2010.

El uso indebido de drogas también tiene consecuencias ambientales. La deforestación y la pérdida de diversidad biológica son consecuencias del cultivo ilícito de arbusto de coca y adormidera, al igual que la pérdida de tierras agrícolas que normalmente se hubieran dedicado a usos productivos. Los precursores utilizados en el proceso de fabricación ilícita de drogas y las propias sustancias fabricadas pueden contaminar el medio ambiente, y la fumigación aérea de cultivos ilícitos de drogas también puede tener efectos negativos. A todo esto se suman, además, las pérdidas de productividad que se generan cuando las personas que están bajo los efectos de las drogas o que reciben tratamiento o están encarceladas no pueden dedicarse a una actividad productiva.

El uso indebido de drogas inflige un daño desproporcionado a los más vulnerables: los niños, cuyo derecho a ser protegidos contra el uso indebido de drogas está consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño. La exposición prenatal a las drogas puede causar trastornos emocionales, psicológicos y físicos, e incluso la muerte. Desde el punto de vista económico, eso se manifiesta en gastos adicionales de atención. Los niños expuestos a las drogas, sea porque las consumen o sea porque viven en un entorno en que se consumen, pueden estar más expuestos a un riesgo mayor de abusos físicos y sexuales y es más probable que padezcan de ansiedad y depresión, tengan problemas educativos y de atención, cometan actos delictivos y caigan en la delincuencia y el consumo de drogas. Deben adoptarse medidas urgentes para proteger el recurso más preciado de la sociedad, los niños, contra el abuso de drogas y sus efectos.

El capítulo I concluye con una selección de mejores prácticas y recomendaciones para mitigar las consecuencias económicas del uso indebido de drogas y, por ende, mejorar el bienestar social. Esto nos lleva de nuevo al principio que subyace al sistema de fiscalización internacional de drogas y los três tratados en que se fundamenta: la preocupación por la salud y el bienestar de la humanidad.

El uso indebido de drogas y el cultivo, fabricación y tráfico ilícitos conexos causan un sufrimiento inconmensurable. En los tres tratados de fiscalización de drogas se establecen los requisitos esenciales para prevenir y paliar el sufrimiento causado por las drogas y garantizar el acceso a los medicamentos esenciales fiscalizados que se considera que tienen valor terapéutico, pese a que pueden generar dependencia. Esas medidas nacen de un enfoque equilibrado de la lucha contra la droga, que exige dedicar la debida atención a la reducción de la demanda —mediante la prevención, el tratamiento y la rehabilitación— y a la reducción de la oferta —mediante la adopción de medidas judiciales y de aplicación de la ley basadas en el principio de la proporcionalidad y el respeto de los derechos humanos.

El compromiso de los Estados partes con la aplicación de los tratados debe traducirse en medidas tangibles y resultados mensurables. Los gobiernos deben velar por que los programas de prevención, tratamiento y rehabilitación y los sistemas de fiscalización reglamentaria sean sostenibles. Esa inversión debe mantenerse incluso en épocas de austeridad financiera. La posibilidad contraria — la pérdida del potencial de los ciudadanos— podría ser la peor “decisión de inversión” imaginable.

El sistema de fiscalización internacional de drogas se fundamenta en el principio de la responsabilidad compartida, entre los países y a todos los niveles de gobierno dentro de un país. Los traficantes de drogas siempre buscan el camino más fácil; así pues, es esencial que no se produzcan fisuras en la labor mundial de lucha contra el problema de las drogas. Preocupan a la JIFE algunas iniciativas que tienen por objeto legalizar el consumo de cannabis con fines que no son ni médicos ni científicos. Esas iniciativas, de seguir adelante, pondrían en grave peligro la salud pública y el bienestar de la sociedad, que es precisamente lo que los Estados se propusieron proteger cuando concibieron los tratados. La JIFE confía en mantener un diálogo permanente con todos los países, incluidos aquellos en que se están llevando a la práctica tan desafortunadas iniciativas, a fin de garantizar la plena aplicación de los tratados y proteger la salud pública.



Raymond Yans
Presidente
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes

III - Análisis de la situación mundial

América del Sur

3. Legislación, políticas y medidas em el ámbito nacional

a) Estupefacientes

p. 65

430. Los datos sobre el cultivo de cannabis en América del Sur son escasos. Varios países han informado del aumento de las incautaciones de cannabis en la región en los últimos años. Por ejemplo, Colombia y el **Paraguay** comunicaron aumentos de más del 100% en las incautaciones de hierba de cannabis en el período de 2007 a 2011 con respecto al período de 2002 a 2006. Sería preciso analizar más detenidamente ese aumento para determinar si obedece principalmente a la intensificación de las actividades de lucha contra la droga o si podría ser indicio del aumento del cultivo ilícito de la planta de cannabis en la región.

432. El cultivo ilícito de cannabis en el Brasil está destinado principalmente al consumo local. En 2012, la incautación de hierba de cannabis disminuyó considerablemente, de 174 t en 2011 a solo 11,2 t. En ese año, las autoridades brasileñas erradicaron cultivos ilícitos de cannabis en un total de 21,7 ha en el país y prestaron asistencia en operaciones conjuntas para erradicar cultivos ilícitos de cannabis en el **Paraguay**.

433. El cannabis cultivado ilícitamente en el **Paraguay** continúa introduciéndose ilícitamente en los países del Cono Sur. Según la Secretaría Nacional Antidrogas del **Paraguay**, la tasa de erradicación de la planta de cannabis cultivada ilícitamente en el país ha disminuido gradualmente, de 1.776 ha en 2008 a 721 ha en 2011. En 2012, el volumen de incautación de hierba de cannabis en el país fue de 175,7 t, lo que supone una disminución del 43% con respecto al nivel del año anterior. La Junta desea alentar al Gobierno del **Paraguay** a que redoble los esfuerzos para afrontar con firmeza el problema del cultivo ilícito de planta de cannabis en su territorio.

p. 66

448. En 2012, varios países de América del Sur, entre ellos Chile, Colombia, el Perú, el **Paraguay** y el Uruguay, comunicaron que las cantidades de clorhidrato de cocaína incautadas habían aumentado con respecto a 2011. [...] En el **Paraguay**, el volumen de incautación de clorhidrato de cocaína en 2012, que fue de 3,1 t, se duplicó con respecto a 2011. Se trata del cuarto aumento consecutivo desde 2008, cuando se incautaron 0,3 t de esa sustancia.